MARIANO OTERO¹ Y SU OPINIÓN SOBRE EL NÚMERO DE MINISTROS QUE DEBÍA TENER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. (SEGUNDA PARTE)

Lic. Alejandro MORALES BECERRA*

*“...la experiencia acredita, que no es en los cuerpos judiciales
más numerosos, donde las custiones se examinan mejor...”*

Mariano Otero, discurso de 3 de agosto de 1849.

José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas² nació el 4 de febrero de 1817 en la ciudad de Jalisco y murió el 1 de junio de 1850. Sus padres fueron el doctor Ignacio Otero y María Mestas.

De la personalidad de Mariano Otero, se destaca “su extraordinaria precocidad: abogado a los dieciocho años, crea el amparo a los treinta y muere tres años despues”.³

La pluma excelente de Jorge Gaxiola nos describe la precocidad de Mariano Otero al manifestar que:

Precoces hay muchos y poco valen. La precocidad en ellos es desproporción entre la vida y el pensamiento; es un hacerse viejo desde la niñez o la juventud; es una prematura adquisición de experiencia no vivida. Muy otra es la precocidad excepcional que consiste en un rápido pero orgánico crecimiento del espíritu, en una temprana madurez que es fruto de experiencia anticipada, en un vivir henchido y de prisa.⁴

* Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¹ El discurso que pronunció en la Cámara de Senadores, el día 3 de agosto de 1849, es la continuación del anterior artículo.

² Cfr., Gaxiola, Jorge. *Mariano Otero (Creador del juicio de amparo)*, México, Editorial Cultura, 1937, p. 21

³ *Ibidem*, p. XXII

⁴ *Ibidem*

Su precocidad y su madurez, siendo joven, fue ofrecida al servicio de los mejores ideales de la patria: su vida y su obra, son testimonio de su amor a la República, a las instituciones y la defensa de los derechos del hombre a través de su máxima creación: el juicio de amparo.

El amor que siempre guardó Otero por Guadalajara, su tierra natal, no conoció límites. Jamás abandonó, al hablar, ese acento tapatío tan característico, y su orgulloso provincialismo lo llevó a extremos tan apasionados como el afirmar que:

el esplendor del lujo y el refinamiento de los placeres, que todos los días crecen en la capital de la República, no se encuentran en aquella ciudad; pero en compensación los vicios de una corte corrompida y una ligereza y la frivolidad de una población empeñada en imitar servilmente y hasta el ridículo las costumbres europeas, no ha invalidado en aquella sociedad y este exceso de asquerosa miseria y de brutal envilecimiento de las últimas clases de México, son absolutamente desconocida. Así los extremos del poder y de la miseria no se tocan y la mediocridad de las fortunas y la comunidad de los medios de subsistir, forman una población de las más felices y morigeradas de la República.⁵

Amaba pues, a su estado querido: Jalisco y se enorgullecía de ser tapatío.

Como político, tuvo cargos de importancia; fue constituyente en 1842 y 1847; senador en 1849 y Secretario de Relaciones Exteriores en la administración de Joaquín Herrera.

Otra de sus facetas fue la de periodista, el siglo XIX da testimonio de sus escritos como «el primer redactor político de el periódico mencionado, al lado de Juan Bautista Morales, mejor conocido como el “Gallo Pitagórico”».

Pero si como periodista fue admirable, como legislador, fue uno de los mejores oradores.

El 3 de agosto de 1849, en su discurso ante la Cámara de Senadores, Mariano Otero defendería el artículo 8o. del proyecto de Ley sobre

⁵ Prieto, Guillermo. *Memorias de mis tiempos*, México, 1906, cit. Gaxiola, Jorge, p. 29

nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación.⁶

En el señalado discurso, este jurista argumenta y da razones de peso al señalar que debían suprimirse dos plazas de las once que existían de ministros propietarios. Asimismo, señala los inconvenientes de integrar Salas de tres o de cinco ministros.

Cita a Bentham y expresa que: "...la rectitud de un juez depende de su responsabilidad ante las leyes, ante la opinión pública y ante su propia conciencia" y demuestra que esta responsabilidad disminuye con el mayor número.⁷

Abunda en razones del porqué de un número reducido de miembros en el máximo tribunal del país.

Analiza a Inglaterra y Francia, señalando a la primera como la cuna de las instituciones judiciales y a la segunda como sabia; puntualizando que sus fallos contemplan una unanimidad en sus votaciones o las tres cuartas partes de los votos de sus integrantes.

Para Mariano Otero, es de vital importancia el número de votos que los ministros den a una resolución, siendo partidario de la mayoría calificada, al hablar de Francia y unanimidad de votos en el caso de Inglaterra. Y señala ejemplos en cuanto a la votación, argumentando las ventajas y desventajas de los mismos.

Citando a otro autor, Otero nos dice en torno a los empleos judiciales:

...y que para ello se ponga en el nombramiento el más escrupuloso cuidado; que siendo corto el número de tribunales y de miembros en cada uno de ellos, puedan ser de mucha trascendencia las ventajas de los magistrados, y se asegure la consideración de estos por medio de miramientos que perderían su valor si se prodigasen, que sería preferible no atribuir en cada jurisdicción sino a un solo juez la decisión de todas las causas, cuando menos en primera instancia; pero que

⁶ *Vid.* El proyecto de Ley sobre nombramiento de ministros. En el número y revista anterior.

⁷ *Discurso que pronunció en la Cámara de Senadores, el día 3 de agosto de 1849, el señor Mariano Otero, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendiendo el artículo 80 del proyecto de ley sobre nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación*, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1849, p. 6

en general es indispensable que el número de magistrados sea el más corto posible...⁸

Al concluir,

ha logrado manifestar que reducido a nueve el número de ministros de la Suprema Corte, puede de pronto conservarse la organización actual de las instancias, sin causar trastorno alguno ni producirle el menor mal y contarse con elementos de reforma, para cuando se expida la ley constitucional que organice al Poder Judicial de la Federación, ley cuya urgencia es suma, pueda el congreso determinar sus procedimientos y restablecer sus instancias de manera que se obtengan los dos grandes bienes que las naciones buscan en sus tribunales; celeridad en sus procedimientos, y acierto en los fallos.⁹

Veamos pues, el discurso de Mariano Otero una muestra más de nuestra tradición jurídica.

⁸ *Idem.* p. 20

⁹ *Idem.* p. 26

NÚMERO DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE SIGLO XIX Y XX

DICTAMEN SOBRE LA LEY CONSTITUCIONAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA*

Las comisiones unidas de puntos constitucionales y segunda de justicia, han examinado detenidamente el proyecto de ley constitucional que la cámara de diputados aprobó para el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia; y no dudan presentar en estas sesiones su dictámen, porque comprendido en la convocatoria el despacho de los negocios de interes general que se hallan en revisión, esta ley constitucional, cuyo resultado habrá de ser la mejor organización del primer tribunal de la federación, afecta de una manera muy directa el interes general de la nación, y porque recuerdan bien que el consejo no la señaló especialmente, conforme había iniciado el ejecutivo, por juzgarla ya comprendida en aquella regla general; pero esponen su sentir, bien penetradas de la dificultad de la materia, y con una desconfianza tanto mas justa, cuanto que conformándose en algunos puntos con el proyecto aprobado, disienten en otros que no son de pequeña importancia.

Cuatro son las cuestiones principales que se tratan de resolver en este asunto: la forma de la elección de los ministros: la manera de suplir sus faltas: la organización del ministerio fiscal: la designación del número de magistrados que se necesiten en aquel cuerpo; y sobre cada una de ellas las comisiones espondrán brevemente los principios en que fundan su dictámen.

Acerca del primer punto, el gobierno proponia que los ministros de la suprema corte de justicia se nombraran por postulación de la misma Corte, del ejecutivo y del senado, dejando en el caso de discordia que la cámara de diputados eligiese entre los propuestos, y aunque tal método reúne ventajas muy apreciables, la cámara iniciadora ha preferido seguir el ejemplo de todos nuestros legisladores, que cometieran ese nombramiento á los cuerpos legislativos de los Estados; y las comisiones se han conformado con el principio de este sistema, convencidas de que por sí es una gran ventaja la circunstancia de conservar las instituciones autorizadas por el juicio de los legisladores que nos precedieron y por las costumbres de la nación; confiadas en el hecho práctico de que por ese medio de elección han ascendido á la suprema corte, magistrados que por sus luces y virtudes

* México, 1849

honrarán á la judicatura; y creidas de que era conveniente que de los Estados de la federación procediese inmediatamente un poder erigido para decidir las cuestiones en que ellos litigan, para amparar á los ciudadanos contra los atentados que pudieran cometer sus poderes legislativo ó ejecutivo, para fallar en suma sobre los asuntos que en el órden judicial afectan los intereses de la Unión; y así, en cuanto á esta parte han preferido el sentir de la cámara de diputados al del gobierno.

Pero la misma cámara ha querido que ese nombramiento se verifique prévia una postulación, de manera que en caso de vacante deberían los tribunales superiores de los Estados postular tres candidatos, en seguida la suprema corte de justicia escoger seis de entre todos los postulados, y luego las legislaturas nombrar uno de estos seis; y las comisiones no se han resuelto á adoptar este método, á pesar de que en su apoyo se presentan razones dignas de consideración.

Defacto, y comenzando por la primera postulación, no tienen las comisiones dificultad en confesar que los tribunales superiores reúnen la ventaja de conocer bien la capacidad de los letrados de sus respectivos Estados á la de ser poco susceptibles de afectarse de las cuestiones políticas que casi siempre dividen á la República en partidos; pero á estas dos circunstancias en que se fundaban las comisiones de la cámara iniciadora, pueden oponerse otras de grave peso y que solo indicaremos.

1a. Los tribunales superiores se componen regularmente de muy pocas persona, y así la postulación partirá cuando mucho de cinco ó seis personas; siendo muy factible que sean cuatro, tres, y aun dos, que es número muy reducido. 2a. Estos tribunales, como todo cuerpo permanente, están sujetos á la influencia de las personas que por sus cualidades adquieren cierto predominio sobre sus colegas. 3a. Por la misma cualidad de ser cuerpos permanentes é instituidos para funciones muy diversas de las electorales, no representan la opinión pública, que siempre debe buscarse y más en un sistema republicano. 4a. Además de todas las razones enunciadas, por la de que la elección de estos tribunales se hace por los gobernadores de los Estados ó cuando mas por las legislaturas, y por la de que generalmente son inamovibles, la elección no seria popular sino en virtud de una serie de inducciones muy remotas.

Esta última consideración ha hecho mucha fuerza á las comisiones, y en verdad que ellas no comprenden cómo cuando se conviene en que por

la naturaleza de las funciones encomendadas á la alta corte de justicia, es muy conveniente que la elección de sus miembros guarde armonía con la del presidente de la República, y cuando por este motivo se desecha como anti-popular el sistema propuesto por el gobierno, se vaya á parar en otro mucho menos popular; pues que de hecho, cuando en un solo candidato se reunieran los tres votos de la corte, el senado y el presidente, ¿no tendríamos que ese nombramiento procedía de una autoridad electa popularmente en toda la república, y por un sufragio casi directo; de una corporación compuesta en sus dos tercios de representantes de los Estados, electos tambien en segundo grado, y en el otro tercio de personas nombradas por la cámara de representantes, y de la misma corte, cuerpo hasta ahora de origen popular y cuya intervencion no pueda tacharse, puesto que se pretende darle el terrible derecho de fijar la elección en un número determinado de personas, y que de esta manera aun sin la intervención de la cámara de representantes, debería considerarse como una elección de origen incomparablemente mas popular que la que partiera de los tribunales superiores de los Estados? Ni puede tampoco contestarse con que esta se haría despues popular en virtud de la subsiguiente intervención de las legislaturas; pues que en nombramiento así combinado, el mayor influjo es sin disputa del que propone, en razón de que mientras éste postula personas todas de su confianza, y las que le parecen mejores entre cuanta hay elegibles; quien escoge se ve reducido a un círculo estrechísimo, prescinde frecuentemente del que le pareciera mejor, y no pocas veces se limita á escoger lo que estima menos malo; llegando esta subordinacion al punto de que se sabe muy bien como la facultad de proponer se convierte de ordinario en la de nombrar con solo que se combine la postulacion de manera que quien escoja no pueda pasar mas que por uno de la propuesta.

Y si el escámen de este método por lo que hace á la popularidad de la eleccion, presenta tales dificultades que las comisiones no pudieron resolverse á aceptarlo; tampoco encontraron en él las garantías de acierto que deben buscarse ántes que todo y pudieran decidirla por él, no obstante aquel inconveniente. El senado observará desde luego que la escasez de número y la facilidad de obedecer la inspiracion de uno, condiciones necesarias de los tribunales superiores de los Estados, no solo dan pocas probabilidades de conformidad con la opinion pública, sino que esponen mucho al error, facilitando el empleo de los resortes, de las consideraciones de partido y amistad. A esto tiende tambien de una manera muy eficaz el gran número de postulaciones que la ley permite. Todo elector al emitir su sufragio considera el influjo que va á tener en el resultado: el legislador que dá su voto al comenzar el escrutinio, no piensa

tanto en sus consecuencias, como cuando va á decidir una votación casi igual ó ya rigurosamente empatada; y de la misma manera cuando se sabe que toda la consecuencia de un voto es poner un candidato mas en una lista donde para un empleo puede haber hasta sesenta y tres postulados, fácil es que la amistad, el deseo de honrar á una persona, cualquiera otro sentimiento extraño al solo legítimo del bien público, decida á procurar ese honor que no trae mas que un riesgo remoto, y una responsabilidad muy repartida de mala elección; mientras que ese mismo hombre sabiendo que su voto podia decidir y que era definitivo, prescindiria de toda consideración privada para no atender mas que al bien público. Considerando todo esto, ¿no es de temerse fundadamente que la lista de los tribunales superiores, contendrá al lado de algunos hombres de mérito otros escasos de él, y que presentará un mosaico donde cada partido, cada preocupación, cualquier ambición privada encontrará candidatos, mucho mas cuando se ha cuidado de dejar á la corte tan espedita que podrá hacer aparte el candidato votado por todos los tribunales y escoger al que no tenga mas que un sufragio? Así consideraron las comisiones que esta misma amplitud otorgada á los tribunales, hace muy débil su acción en el nombramiento, así como disminuye la garantía que con ella se buscara.

El principio del sistema adoptado en la cámara de diputados, consiste, pues, realmente, en hacer partir la elección de la suprema corte, fundándose en que el interes de este cuerpo le haria no proponer nunca un hombre indigno y por cuanto á que se quiso reunir esta garantía á la de una elección menos restringida se determinó que la lista entre la cual debieran votar las legislaturas fuese de seis. Las comisiones conocen todo lo que hay de bien pensado en este sistema, y dando todo su aprecio á las razones en que se apoya, espondrán otras cuyo peso es mayor á su juicio. Lealmente hablando, en el nombramiento de los individuos que ha de componer la suprema corte de justicia, no se pretenden tanto escluir á los indignos, cuanto encontrar á los mejores, y esto es tan cierto que de aquí procede precisamente la dificultad, porque si se tratara solo de lo primero, tal condición la hallariamos en cualquier sistema medianamente combinado, pues sin recurrir al justo zelo del honor del cuerpo, hasta el amor al bien y el respeto á la opinion para que ni las cámaras ni nuestro gobierno hicieran entrar un hombre indigno al primero, al mas respetable, al mas importante de los tribunales de la nación, como no lo hacen entrar los gobiernos de algunas naciones constitucionales de Europa, y el mismo de los Estados-Unidos, cuando eligen esta clase de magistrados. Débil es por lo tanto la razón que se limita á dificultar una elección indigna, y esta es la única que se alega.

Al tratar las comisiones esta cuestión, tienen presente que no es la suprema corte un cuerpo puramente judicial, cuyos ministros baste que tengan los conocimientos de un letrado y la probidad de un hombre de bien para que desempeñen sus funciones; sino que consideran que se trata de un tribunal, ante el cual comparecen como simples litigantes los Estados de la Union y la república misma; que tiene la tremenda facultad de hacer inaplicable una ley cuando la considera contraria á la constitución, y que decide en todas las cuestiones judiciales que afectan el honor y las relaciones exteriores de la República, y contemplándola bajo este aspecto no pueden menos que ver en ella un cuerpo político, encomendado de un poder muy fuerte de conservación, y en cuyo modo de formarse es preciso buscar las cualidades propias para tan eminente magistratura, la armonía que debe guardar con los demas poderes constitucionales, el amor ardiente de las instituciones, y aquella rara sabiduría que distingue las novedades que las corrompen, del espíritu de mejora que las modifica con acierto. De donde se sigue que es preciso en vez de aislar tal cuerpo, ponerlo en relación con el todo, impedir que se forme un espíritu especial y reservarse medios de que se corrijan los errores en que pueden caer y de que son susceptibles los hombres mas recomendables, y en verdad que las comisiones no hallarian el modo de conseguirlo si se diera á ese cuerpo el derecho, si no de nombrar sus propios ministros, sí inconcusamente el de apartar irrevocablemente de su seno á cuantos quisiera.

Inamovibles, fuertes por las leyes, respetados por la opinion los ministros de la suprema corte, ejercen una acción muy poderosa sobre esos otros poderes, y por lo mismo, cuando llega el único momento en que ellos pueden influir sobre ella, si se quiere, que se puedan rectificar los errores y las preocupaciones de que toda corporación es susceptible, si se desea que la nación coloque allí los hombres que le den mejores garantías, es necesario no sujetar aún ese acto mismo á una acción tan enérgica como la de tal exclusiva.

Así, por poco que se medite sobre estas relaciones tan importante, se ve que una cuestion al parecer limitada al acierto de la elección, tiene tal gravedad, que si no se resolviera con mucha prudencia, podria comprometer la constitución misma del Estado y este temor se aumenta si se considera la fuerza que pudiera adquirir un cuerpo dotado de **funciones importantísimas**, al cual en un sistema en que todo se renueva y **todo** reconoce por origen el sufragio popular, se concediera sobre la perpetui-

dad, condición conveniente de su modo de ser, el derecho de aquella exclusiva. Hace mucho tiempo observó Mostesquieu, que “nada era tan funesto como dar á un cuerpo el derecho de reemplazar á los individuos que faltaban en su seno, porque nada era mas propio para perpetuar los abusos;” y esta máxima que han reconocido los legisladores de todos tiempos y que entre nosotros se acaba de aplicar á la organización de esta cámara, tiene muy bien lugar, respecto de un cuerpo que por su perpetuidad y el corto número de sus miembros, tiene ya de por sí bastante propensión á aislarse de los demas poderes que pasan fugitivamente delante de él. Las comisiones no creen que pudiera dárse á cuerpo alguno semejante poder, sin ponerse en peligro ó de que este cuerpo desapareciera, ó de que perturbase la constitución del Estado, y como no tiene noticia de una organización semejante, nunca autorizarían un ensayo de esta clase.

El asunto es tan grave, que aun se prestaria á algunas otras consideraciones de importancia; pero su esposición escenderia los límites de este escrito, y por lo tanto, dejándolos á la meditacion de la cámara, las comisiones concluirán con decir sobre esta parte de su proyecto, que aunque alguno de los que firman este dictámen deseaba que la elección se verificase entre tres candidatos propuestos en tres dias consecutivos por el gobierno, la suprema corte y el senado, sin que pudiera reunirse dos postulaciones en el mismo sujeto, las comisiones se decidieron porque la elección se hiciera sin prévia propuesta, por las razones que en favor de tal sistema quedaron ya indicadas al principio, porque se temia que estas postulaciones hechas todas en la capital de la república, dificultaran á los letrados distinguidos de los Estados, la entrada al supremo tribunal de la nación, y porque se quiso dar á los Estados, tan zelosos del principio federativo, toda la garantía que pudieran apetecer. Las comisiones están enteramente conforme en que la votación en caso de que ninguno haya reunido la mayoría absoluta de votos, se haga por la cámara de diputados votando por personas; y como la esperiencia ha demostrado que podía eludirse la voluntad de las legislaturas anulando sufragios, se propone que la calificación de estos se haga antes por el senado.

Las demas disposiciones relativas al nombramiento de los ministros de la suprema corte, son tan sencillas que con solo leerlas se descubre su objeto.

Han convenido tambien las comisiones con el proyecto de la cámara de diputados en la parte que previene se nombren cuatro ministros supernumerarios perpetuos para que suplan las faltas temporales de los ministros propietarios y entren á cubrir sus vacantes por el órden de

su nombramiento, considerándoseles en todo, excepto en cuanto el sueldo, que es un poco menor, como propietarios; porque nadie desconoce los gravísimos inconvenientes de que las salas de la corte se completen todos los días con letrados, que llamados allí por poco tiempo continúan ejerciendo su profesión y litigan en el tribunal mismo donde desempeñan las funciones de jueces. Bien podrán en tales casos, encontrarse, como las comisiones creen se reúnen hoy, en los propietarios y en los suplente, la mayor probidad y la mas esquisita delicadeza, siempre el diario é íntimo trato con los ministros, el influjo sobre los dependientes y jueces inferiores, la prevención en favor de las opiniones que se defienden en procesos semejantes hacen que la administración de justicia, así ejercida deje de ser imparcial; y como esto no puede remediarse mas que poniendo de suplentes personas que se retiren de la carrera del foro y entren en la judicatura, el fondo de idea que ahora se somete á las cámaras, es indispensable. Las comisiones querian mas: deseaban que los mismos suplentes que han de cubrir las faltas de los propietarios cuando ya no basten los supernumerarios, fuesen personas que no ejercieran la abogacía; pero no encontraban medio de hacerlo sin recurrir á los jueces de primera instancia, sistema que se ha abandonado por los graves inconvenientes que ofrece y que la cámara conoce.

Arreglado lo tocante á los ministros, se debe hablar del fiscal, pues respecto de este funcionario, las comisiones segun antes dijeron, han creído necesario proponer reglas de diversa naturaleza. Conforme al proyecto aprobado por la cámara de diputados, el fiscal se nombraría de la misma manera que los ministros, y pasados seis años se le concedía el derecho de ascender á propietario con preferencia á los supernumerarios, y las comisiones han creído que aunque por la importancia de sus funciones se haya concedido a los fiscales los mismos honores y consideraciones de los ministros de los tribunales, la naturaleza de estas hacia conveniente que estuvieran separadas las carreras de fiscal y de ministro. En nuestro sistema, el fiscal es el abogado de la nación: a su zelo, á su pericia, á su energía y probidad, están confiadas la defensa de los intereses del erario y de las mas altas prerogativas de la república; de manera, que un error ó una debilidad, podrán producir inmensos perjuicios, sin que se pueda siquiera esperar en el recurso de la responsabilidad que es generalmente inadecuado para esta clase de faltas; y así es forzoso reconocer que se necesitan cualidades diversas para la magistratura que para la fiscalía, de manera que un excelente juez podría ser un fiscal poco conveniente. Esta verdad es tan obvia y palpable, que no necesita recordar sus fundamentos; pero sí que de

ella se sigue que es necesario nombrarlos con separación, para que así los que elijan, en cada caso busquen las cualidades diversas de cada uno de estos empleos.

En la antigua organización de nuestros tribunales se había conocido mucho esta verdad; por eso la fiscalía fué una carrera distinta de la judicatura: los que se distinguían por su zelo y por su saber en las fiscalías de los tribunales de menos gerarquías, eran sucesivamente ascendidos á los de mas importancia; se les contaba su antigüedad en competencia con la de los ministros de los mismos; disfrutaban de todas las prerogativas de estos y aun estaba mandado que se les considerasen sus servicios para presentarlos en las vacantes; pero el soberano se reservaba conservarlos todo el tiempo que creía conveniente en aquel puesto de tan delicadas funciones, y en verdad que si ahora adoptáramos el sistema de dar al fiscal derecho para ascender ya en todo caso de vacante, ya despues de un término de cuatro ó seis años, en vez de aquel sistema que produjo hombres insignes, haríamos de la representación fiscal una carrera inferior á la de la magistratura, que se consideraría solo como un escalon para ésta y que se desempeñaría como de paso, sin que la nación pudiera aprovechar las ventajas de una larga práctica. Por estos motivos las comisiones se han decidido á no consultar el ascenso del fiscal; mas esto en el concepto de que se hiciera la plaza de fiscal la mejor dotada de todo el órden judicial, para que así creciera en consideración, para que pudiera ser solicitada de preferencia á la magistratura y tambien para que en este punto la remuneración fuera proporcional al trabajo, pues no cabe duda en que las funciones del fiscal sean uno ó dos, serán siempre mucho mas laboriosas que las del magistrado.

El cúmulo de trabajo que hoy reporta la fiscalía es tal, que aun suponiendo el ausilio de los agentes, es casi imposible que un solo hombre acuerde el despacho de todos los negocios que se le pasan y se encargue de estender por sí mismo los pedimentos mas importantes. No debe olvidarse que en casi todos los negocios propios de la corte de justicia se tiene que oír la opinion fiscal y que las cuestiones que allí se presentan no son de ordinario las que por su frecuente repeticion pueden resolverse con facilidad y prontitud; sino cuestiones difíciles de derecho administrativo, de principios constitucionales de jurisprudencia internacional, para cuya resolución se necesitan conocimientos mas estensos y meditaciones mas laboriosas que para las comunes cuestiones del derecho civil y criminal; y por esto las comisiones creen consultar una medida muy útil,

proponiendo el nombramiento de dos fiscales que turnen en los despachos de los negocios. De esta manera cada uno de ellos tendrá mas tiempo para despachar los negocios con estudio; así se proporcionará á la causa pública la ventaja de este concurso de luces; y así, en fin, la falta perpétua y aun temporal del fiscal no dejará la defensa de los derechos mas importantes espuesta á todas las consecuencias de la inesperienza y de un cambio completo. En apoyo de su opinion, las comisiones recuerdan que casi todos los tribunales colegiados han tenido siempre dos fiscales y que las funciones que hoy desempeña el de la corte de justicia, se repartian antes entre varios funcionarios de esta clase.

Por último, las comisiones creyeron tambien que la naturaleza de las funciones fiscales ecsigia otra reforma, porque si es muy justo que en la elección de un juez haya de considerarse la imparcialidad que debe adornarlo y se busque la separacion de los tres poderes; al instituir un funcionario que no va á fallar sino á defender, se ecsige en el representante una mayor conformidad con aquellos cuyos actos va á sostener, para que no sean condenados á los hechos de los otros poderes sin que antes hayan sido bien y lealmente defendidos: y aunque tenemos el ejemplo de que en España, en Inglaterra y en los mismos Estados- Unidos del Norte, estos funcionarios son nombrados por el ejecutivo y permanecen bajo su influencia, las comisiones no han ido hasta allá. Cuando una nación ha tenido gobiernos inestables, cuando por largo tiempo se ha visto el poder asaltado revolucionariamente, y en consecuencia de éste hecho, se ha mirado con frecuencia que la administración cedia á intereses anti-nacionales y que olvidaba la política estable, la larga prevision y el interés del porvenir que distinguen á los gobiernos, consolidados, hay en la sociedad una tendencia muy natural y hasta cierto punto justa para desconfiar de ese poder, para rodearlo de trabas, y en consideración á tal estado, las comisiones creen que es muy conveniente hacer entrar diversos elementos en esta eleccion: la limitan á las autoridades de la Union porque estas son las que mejor conocen los negocios generales, y de consiguiente los hombres mas propios para tratarlos; y creen que interviniendo el poder ejecutivo á quien incumbe el cuidado de la buena administracion de justicia conservación de las prerogativas del poder público, la corte de justicia que ha entendido en el debate de todas las cuestiones que van á parar al ministerio fiscal y la cámara, en la cual la constitucion ha querido depositar la conservacion de las instituciones, se tendrian las mayores garantías de acierto y adoptan para este caso

la iniciativa del gobierno, con solo la diferencia de que la cámara de diputados decida la elección por personas y no por diputaciones.

Fácil es preveer que en una época de penuria, el aumento de un fiscal, el del sueldo de ambos, y el nombramiento de los cuatro supernumerarios debían considerarse como un recargo á las atenciones del erario, y que de aquí dimanarian objeciones. Pero debe considerarse, que sin la existencia de los supernumerarios, constantemente hay suplentes cuyo pago se hace y que no es en la administracion de justicia, ramo el mas importante y el mas económico donde deben buscarse ahorros suprimiendo lo conveniente para limitarse á lo necesario, y menos cuando se trata de una cantidad que no llega á 23.000 ps. al año. Pero aun en esto han pensado las comisiones, y como no creen que deban conservarse plazas inútiles, proponen que hoy tres vacantes en la corte de justicia, se reduzca á nueve el número de sus ministros propietarios. El de once con que fúe establecida, tenia por objeto que hubiera una sala de cinco, y ademas de que esta podria formarse con dos de los supernumerarios ó de los ministros que no estuvieran impedidos; en el concepto de la mayoría de las comisiones, una sala de cinco no presenta mas ventajas que otra de tres.

Porque la probabilidad del acierto de una decision puede considerarse bajo dos aspectos, ó aislada á la computacion de sus propios votos, ó en relacion con los de los jueces cuya sentencia revisan. En el primer caso y en tribunales de número impar como los nuestros, en que la mayoría hace sentencia, la mayoría de dos á uno, es mas que la de tres á dos, ésta mayor que la de cuatro á tres, y así sucesivamente, de modo que se puede concluir con el rigor de una verdad matemática, en que bajo estas condiciones, la decision tomada á simple mayoría, es tanto menos probable quanto mayor sea el número de jueces. Bajo el otro aspecto, si á primera vista parece chocante que tres jueces revoquen la sentencia de otros tres, y aun la de seis; luego que se medita, se viene en conocimiento de que este mal no se remedia con el nombramiento de cinco, porque siempre queda establecido el principio de que el dictámen de la minoría se sobreponga al de la mayoría. Efectivamente, si suponemos que las sentencias de primera y segunda instancia hayan sido dadas por unanimidad, y que obteniendo en la tercera un voto de confirmacion, se revoque por solo dos votos la decision de siete; en el caso de que en una sala de cinco estén dos conformes con los de seis de primera instancia, ¿no es igualmente seguro que entonces el voto de tres prevalecerá sobre el de ocho? Y siendo estos dos casos igualmente posibles y estas dos resoluciones igualmente injustas, ¿dónde está la ventaja de la sala de cinco sobre la de tres? De la misma manera

resulta que no hay ventaja en el caso de que supongamos la sentencia de primera instancia dada por dos contra uno confirmada en la misma proporción en la segunda instancia y revocada en la tercera también por la mayoría contra la minoría, porque entonces en la sala de tres tendríamos que prevalecía el voto de cuatro contra el de cinco, y en la de cinco, el de cinco contra seis.

Estos dos ejemplos que puede multiplicarse con otras combinaciones mas raras, bastan para probar que esta facultad de hacer prevalecer la sentencia menos probable, no se aparta con la institucion de una magistratura numerosa, sino con la estincion de la tercera instancia ó con la adopción de un sistema por el cual las sentencias de segunda instancia, solo quedasen revocadas cuando hubiera contra ellas ó un número mayor de votos, ó votos que tuvieran en su favor mayores presunciones de acierto. Lo que sí se presenta con mucha claridad, es que destruido aquel argumento de mera procupacion, el tribunal de tres escede al de cuatro en aquellas grandes ventajas de una accion mas espedita y una responsabilidad mas directa, que tanto se han hecho valer por Bentham en favor de los tribunales unitarios, debiendo observar con aquel eminente jurisconsulto que el mayor acopio de luces no es una razon sólida que autorice el mayor número de jueces, porque como los tribunales no conocen de ninguna causa sin que las partes interesadas apoye sus derechos por medio de sus abogados, aun cuando la cuestion sea dificil, lo que sucede en el menor número de casos, la discusion se encuentra auxiliada con este debate en que cada parte se hace los mayores esfuerzos para ilustrarla.

La sabiduría del senado decidirá con todo lo que le parezca mas conveniente sobre estas reformas. Las comisiones se han estendido ya sobre los puntos capitales de su sistema para no detenerse en puntos mas secundarios que la discusion les permitirá abrazar, y así concluirán presentando la parte resolutive de su proyecto. Bien penetrados de la grande importancia de las funciones que nuestra constitución comete al poder judicial de la federacion, han querido no omitir nada que pudiera conducir á que el elemento de la eleccion obrara todo de manera que en aquel poder se encontraran la elevada sabiduría y el incontrastable patriotismo que deberán producir tan buenos resultados, y han considerado á la eleccion solo como un elemento, porque no se les oculta que no es únicamente de la manera de elegir de lo que depende la bondad de los tribunales. Todavia mas que aquella, las formas del procedimiento, la independenciam de sus funciones, la

seguridad de una suerte descansada y honrosa, el respeto que en los países libres rodea al poder judicial, y el todo poderoso influjo de las costumbres hacen que el magistrado no olvide nunca la importancia de las funciones que la ley le comete, y que aumente todos los días el brillo de sus virtudes. ¡Quiera Dios que nosotros logremos al fin consolidar firmemente institución tan preciosa!

El proyecto de las comisiones es como sigue.

Se aprueba el proyecto de la cámara de diputados, con las variaciones que importan los siguientes artículos:

Art. 1o. La suprema corte de justicia se compondrá de nueve ministros propietarios y dos fiscales.

Art. 2o. Tendrán además cuatro ministros supernumerarios, los cuales cubrirán las vacantes de los propietarios por el orden de su nombramiento y suplirán también sus faltas temporales.

Art. 3o. Tan luego como haya una vacante en la suprema corte de justicia, el gobierno expedirá un decreto para que las legislaturas de los Estados en el día 3 de Marzo siguiente al año en que ocurriere, procedan á elegir el supernumerario cuyo lugar quedó vacante, conforme al artículo anterior.

Art. 4o. En ese día las legislaturas de los Estados reunidas en el número suficiente para la votación de las leyes, procederán á elegir uno, después de otro, en escrutinio secreto y á mayoría absoluta de votos, dos candidatos que tengan las cualidades que requiere la constitución, y de los que uno al menos no podrá ser, ni natural ni vecino del Estado que lo elige.

Art. 5o. Se levantará una acta en que consten, el número de los diputados concurrentes á la elección, y el resultado pormenorizado de cada uno de los escrutinios, y se dirigirá por el primer correo copia certificada de esta acta á los secretarios de la cámara de senadores.

Art. 6o. En la primera sesión que haya después del 9 de Abril siguiente al de la elección, se dará cuenta con todas las actas, y si resultare el voto de las tres cuartas partes de las legislaturas, se nombrará una comisión especial que las examine y presente dictámen sobre su calificación, la cual estará hecha á más tardar en las tres sesiones siguientes á aquella.

Art. 7o. El senado solo puede declarar inválido un voto por las siguientes causas:

- I. Falta de número.
- II. Error de cómputo.
- III. Suplantación de voto.
- IV. Intervencion de la fuerza.
- V. Faltas de cualidades en el electo.

Si un Estado nombrare dos personas de su vecindad ó nacimiento, será inválida la eleccion hecha en segundo lugar.

Art. 8o. Si hecha esta calificacion, resultaren hábiles al ménos las cuatro quintas partes de los votos correspondientes á las tres cuartas partes de las legislaturas, se pasará todo el espediente á la cámara de diputados para que ántes de concluir el periodo de sus sesiones ordinarias, proceda á la computacion de votos, y en su caso al nombramiento de ministro.

Art. 9o. Computados los votos válidos de las legislaturas, si alguno hubiere reunido el sufragio de la mayoría de éstas y mas votos que todos los otros, se declarará que está legítimamente electo. Si ninguno reuniere á la vez estas dos condiciones, la cámara procederá á elegir precisamente entre los dos que obtuvieron mayor número de sufragios.

Art. 10. Si mas de dos tuvieren entre sí igualdad de sufragios y mayoría respecto de los demas, entre todos éstos se verificará la elección. si uno tuviere mayoría y otros varios igual número de sufragios entre sí; pero menores que los de aquel y mayores que los de los demas, entre éstos se escogerá uno que compita con el primero.

Art. 11. En todas estas votaciones procederá la cámara de diputados por escrutinio secreto, á mayoría absoluta y votando por personas. En caso de empate se repetirá la votación, y si aun se empatare, se decidirá en votación por diputaciones.

Art. 12. En el evento de que en los días señalados por esta ley no haya el número de votos que ecsigen los artículo 5o. y 7o., el congreso general señalará dia para que se repitan todas las elecciones.

Art. 13. En el caso de vacante de la fiscalía, se dará aviso á la cámara de diputados, y ésta señalará dia para que se proceda á la postulación. En ese dia la corte de justicia, el presidente de la república y el senado, postularán un individuo. Si los tres votos recaen en una misma persona, ésta quedará nombrada, y si en varias, la cámara de diputados elegirá uno entre los propuestos, procediendo del modo establecido en el artículo 10.

Art. 14. Los ministros supernumerarios tendrán los mismos honores, prerogativas y restricciones que los propietarios, con diferencia del sueldo, que será solo de quinientos pesos ménos.

Art. 15. Los fiscales se distinguirán por su antigüedad, tendrán los mismos honores, prerogativas y distinciones que los ministros de la suprema corte, y disfrutarán mil pesos mas de sueldo que éstos. Será obligación del mas antiguo, promover ante la misma suprema corte, en los asuntos de su competencia, cuanto corresponda á los derechos de la nación: escitados por el gobierno, podrán hacerlo cualquiera de los dos.

Art. 16. Los individuos de la suprema corte, no pueden ser apoderados judicial ni estrajudicialmente, ni árbitros, ni asesores; tampoco podrán ser albaceas, tutores, curadores, ni abogado, mas que de sus consortes y parientes dentro del cuarto grado.

Art. 17. Para suplir las faltas temporales de los ministros de la suprema corte, despues de los supernumerarios, cada año elegirá la cámara de diputados, en el mes de Enero, nueve suplentes letrados, y que tengan las demas condiciones que la ley ecsige en los propietarios.

Art. 18. Por esta vez las elecciones de los ministros propietarios que faltan y de los cuatro supernumerarios, se verificarán por las legislaturas á los dos meses de sancionada esta ley por el ejecutivo: la computación se hará cuarenta dias despues, y la cámara de diputados procederá luego á nombrar los suplentes de que habla el artículo anterior.

Sala de sesiones de la cámara del senado. México, Julio 18 de 1849. - Otero.-Urquidi.-Robredo.-Salonio.-Linares.-Flores.

PROYECTO DE LEY APROBADO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, A QUE SE REFIERE EL ANTERIOR DICTAMEN.

Art. 1o. Los ministros de la suprema corte de justicia se nombrarán de la manera siguiente:

Para cubrir cualquiera vacante que haya en este tribunal, los superiores de los Estados y el del Distrito y Territorios, postularán tres personas, de las que no podrá ser mas que una del seno del mismo tribunal. Fundarán su postulacion, esponiendo los motivos que hayan tenido para hacerla; y la harán á los ocho días de recibido el aviso que la suprema corte deberá darles de cualquiera vacante que ocurriere.

Luego que se hayan verificado estas postulaciones, se remitirán á la suprema corte de justicia, á fin de que con presencia de ellas, postule seis personas para llenar la vacante de entre las postuladas por los tribunales: fundará como éstos su postulacion, y la hará á los sesenta dias de haber comunicado el aviso de que se habla en el párrafo anterior, siempre que hubiere recibido mas de la mitad de las postulaciones que debieron hacerse: en el caso contrario, aguardará á que se reciban.

Su postulación la remitirá inmediatamente á las legislaturas de los Estados, para que á los sesenta dias de hecha, elijan al ministro de entre las personas comprendidas en ella. Si debieran llenarse dos ó mas vacantes, las legislaturas podrán elegir para cada una, á cualquiera de las personas comprendidas en las diversas postulaciones que haya hecho la suprema corte, á no ser que la vacante que se trate de llenar, sea la del fiscal, porque entónces no podrán elegir sino de entre los postulados para esta plaza. Verificada que sea la eleccion, remitirán las legislaturas las actas de ellas á la secretaría de la cámara de diputados, para que se computen los votos.

Con este objeto se leerán las actas ante la misma cámara, á los treinta dias de haberse verificado la eleccion, si se hubieren recibido las de las tres cuartas partes de las legislaturas. Concluida la lectura, se nombrará una comision compuesta de un diputado por cada Estado de los que tengan representantes presentes, para que las revise y dé cuenta con su resultado, procediéndose en seguida por la cámara á calificar las elecciones y á la enumeración de votos.

El que reuna la mayoría absoluta de los de las legislaturas, quedará nombrado ministro. Si ninguno la reuniere, la cámara de diputados, votando por personas, eligirá de entre los candidatos que tengan los dos números mayores de votos.

Art. 2o. En los mismos términos que espresa el artículo anterior, se nombrarán cuatro ministros para suplir las faltas de los de la suprema corte de justicia, debiéndose además emplear en los otros trabajos que le encargue el tribunal pleno. Tendrán las calidades, obligaciones, prerogativas y derechos que los ministros, á escepción del sueldo, que será de mil pesos ménos al año.

Art. 3o. Segun el órden con que sean nombrados estos cuatro ministros, así irán ocupando las vacantes que ocurran en el tribunal, ménos en el caso de que el fiscal haya desempeñado la fiscalía por mas de seis años, porque entónces, si quisiere este ministro, será preferido en la vacante, y se procederá en seguida á cubrir la suya del modo establecido en el artículo primero.

TRANSITORIOS

Art. 4o. Mientras la suprema corte de justicia haga las veces de tribunal superior en el Distrito y Territorios, la postulacion encargada á los tribunales en el art. 1o., se hará en el mismo Distrito por los jueces letrados de hacienda y del ramo criminal y civil que funcionan en la capital.

Art. 5o. En esta vez comenzarán á hacerse las elecciones de que habla esta ley, á los ocho dias de publicada; mientras se verifican, la suprema corte nombrará los suplentes que necesite, con arreglo al decreto de 20 de Noviembre de 1841.

DISCURSO QUE PRONUNCIÓ EN LA CAMARA DE SENADORES, EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1849, EL SR. LIC. D. MARIANO OTERO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DEFENDIENDO EL ARTÍCULO 8o. DEL PROYECTO DE LEY SOBRE NOMBRAMIENTO DE MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN.

Señor.

Al formar el proyecto que hoy se discute, las comisiones estuvieron muy distantes de creer que de todas las disposiciones que él contiene, ésta, la de supresión de dos plazas, de las once de ministros numerarios de la suprema corte de justicia, sería la que mas habia de llamar la atención, y la mas digna de disputarse, porque nunca se les presentó, ni muy grave de por sí, ni tan importante que mereciese la preferencia respecto de algunas de las demas; por eso apenas se ocuparon de fundarla, indicando ligeramente algunas reflexiones que la apoyaban.

Pero despues ella ha sido atacada con esfuerzo por algunos señores senadores, y por el señor presidente de la suprema corte de justicia, quien en sus observaciones, que impresas se nos han distribuido, asegura que la reforma propuesta “ofende la razón, la justicia y la decencia: que introduce una novedad estupenda; que arrolla de un solo golpe muchas de nuestras leyes; que ataca las garantías legales del hombre, aun en los mas respetables funcionarios, y que echa por tierra los principios de toda buena legislación, aun de la establecida en los gobiernos despóticos;” de manera, que si todo esto fuera esacto y ella se adoptase, la república debería, no solo envidiar la condición de los otros pueblos, sino estrañar, bajo este aspecto, la misma organización que tuvo en su época colonial. Y ya se vé que una impugnación tan séria en su carácter, como respetable en su origen, ha debido obligar á las comisiones (como supone el Sr. Gamboa) á pensar con meditación sobre el asunto, y constituir las en el estrecho deber de manifestar al senado, que si ellas insisten en su primer dictámen á pesar de todo el respeto debido a las opiniones del Sr. Peña, y sin embargo de que tienen la mejor voluntad para confesar cualquier error en que hubieren incurrido, impidiendo aun el mas pequeño de los males que de él pudieran seguirse, es porque no han encontrado que aquellas calificaciones sean justas, porque entienden que lejos de que sus teorías tengan ese carácter de novedad que llegaria á la estravagancia, estan de acuerdo con los mejores principios de legislación, con lo que se practica en los países mas adelantados, y con el espíritu de nuestras leyes.

Procuraré manifestar los motivos de esta convicción; y suplico al senado dos cosas: que me perdone la molestia inevitable de entrar en el escamen de las razones, de las autoridades y de los monumentos legales, que se citan en contra, y que olvide la distancia que media entre los que contienden, para no admitir mas autoridad que la de la razon.

En la exposición de los motivos, por los que las comisiones consultaron la supresion de esas dos plazas, se dijo en general, que una sala de cinco ministros, no presentaba mas garantías que otra de tres, y procediendo sobre la equivocacion (que mas adelante demostraré ser palpable) de que con solo nueve ministros, la suprema corte no podria tener sala de cinco, se hacen de esta combinacion tales elogios, que dificilmente se podria creer, que se contraponia á otra tan prócsima como la de tres, y admitida tan generalmente como esta lo es entre nosotros. Porque no hay duda; ni el Sr. Peña, ni las comisiones, quieren que los tribunales de apelacion sean unitarios; ni el uno, ni las otras, están tampoco por tribunales numerosos; ambos prescinden en el debate de los tribunales en que el número de los jueces sea par, y convenidos así en principios, es decir en la adopcion de los tribunales colegiados, de números impares y no muy numerosos, solo diferimos en preferir el uno al otro de los dos puntos mas prócsimos de una misma escala, la sala de tres á la de cinco, y de aquí ¿no se sigue por necesidad que todas las razones que puedan darse en favor de una de estas dos graduaciones obrarán con mas ó menos fuerza en favor de la otra? ¿Ni cómo es posible entre estos dos pasos haya tanta diferencia, que el uno constituya la mejor de las combinaciones, y el otro merezca calificarse de inaudito? No, Sr., la cuestion desde el principio se ha estraviado por la escageracion tan impropia de esas discusiones, en que es necesario reconocer el bien y el mal, y pensarlo sin pasion, sin espíritu de sistema.

Nuestra diferencia consiste mas bien en las teorías que en la aplicacion, y esto esplica por qué no nos convenimos. Las comisiones asentaron que una sala de tres no era inferior á una de cinco, porque aquella llevaba estas ventajas: mayor celeridad, responsabilidad mas directa, y la circunstancia de que en el caso de una sentencia dada á simple mayoría en ambas salas, esa sentencia tendria mas probabilidades de justicia en la de tres, que en la de cinco. Por mas que se haga, señores, estas mismas ventajas quedarán siempre en favor de la sala menos numerosa, porque ellas disminuyen en la proporcion que se aumenta el número de los jueces; quedarán á favor de la de cinco respecto de la de siete, y á la de siete respecto de la de nueve.

La mayor celeridad es evidente y obra toda en favor del menor número, porque no puede negarse, que mientras el número es mayor, se necesita mas tiempo para imponerse de los negocios, se dificulta mas la reunion de los jueces, éstos cambian con mas frecuencia, y es mas pausada su acción. Pero ¿esta tardanza no proporciona mayor ilustracion? ¿Aquella celeridad no nos lleva á la justicia turca de que habla Montesquieu? Ni lo uno, ni lo otro. La discusión se ilustra en los tribunales, no tanto por el esfuerzo de los jueces, como por el de las partes, que asistidas por sus abogados é impulsadas por su interes, desentrañan y alegan cuanto les es favorable; y sin duda que bastan tres hombres medianamente instruidos, con tal que sean rectos, para distinguir en ese choque de alegaciones, la verdad del error, y los razonamientos de la justicia de los artificios de la astucia: la experiencia acredita, que no es en los cuerpos judiciales mas numerosos, donde las cuestiones se ecsaminan mejor; y por esto precisamente refiere el Sr. Peñá, que en Inglaterra los Pares dejan que un reducido número de sus colegas desempeñe las funciones judiciales de toda la cámara. En cuanto á la cita de Montesquieu, ya victoriosamente contestada por Bentham, lo mismo que la de Berenger, que tambien se le opondre de nuevo, yo agregaré, señores, que Montesquieu, al ecsaminar la relacion de las leyes criminales con el principio del gobierno, no pensó en el número de los jueces, sino en las formas del juicio; no condenó al Bajá porque era un juez único, sino porque era un juez que no instruía causa, que no averiguaba los hechos, que no permitia la defensa, que sentenciaba sin sujetarse á ninguna ley ecsistente; y así, la autoridad de este publicista en nada obra contra nuestro dictámen.

Sin embargo, tan recomendable como es la celeridad, no constituye la primer ventaja de los tribunales poco numerosos: me parece con mucho superior á ella la responsabilidad de que tan largamente trata Bentham, y que muy mal se confunde con la abstracta posibilidad de no causar lo mismo á un magistrado que á cinco, que á diez. Este pensador eminente, observa que "la rectitud de un juez depende de su responsabilidad ante las leyes, ante la opinion y ante su propia conciencia," y demuestra que esta responsabilidad disminuye con el mayor número: primero, porque "una corporacion de jueces poderosa y de mucho número, robustecida con sus relaciones sociales, en vez de estar sujeta á la opinion pública, se juzga en estado de darle la ley....." pues es este un resultado necesario de la prevencion popular en favor de la clase, de la autoridad y de la instrucción que se supone en una reunion de hombres escogidos..... y así "la historia de las corporaciones numerosas nos prueba dos cosas: su independencia de la opinion, y su ascendiente sobre una parte mayor ó menor del público:"

segundo porque la pluralidad suministra á los jueces el medio de absolverse a sí mismos, echándose la culpa unos á otros de la odiosidad de un decreto injusto, de manera que siendo obra de todos, no lo es de ninguno. Confieso que tal no era mi modo de ver; pero la opinion general era tan poderosa, que no pude resistirla. Este es, dice, el language de varios jueces y el de sus amigos, de suerte que la debilidad que cede, pasa por modestia, y la cobardía por deferencia. Si ha habido enbate conocido de opinion, cada cual se liberta ó liberta á sus partidarios al abrigo de esa minoría desconocida. Así es como se elude la afrenta de una injusticia, y como se desvanece en la muchedumbre. Pero un juez único está ligado á su decreto de una manera indisoluble, y no tiene escapatoria; es una corona ó una argolla:” tercero, porque la estimación de los jueces, fortifica contra la censura de fuera; y cuarto, porque la pluralidad hace menos necesarias la atención y el cuidado: la pereza introduce el hábito de fiarse en el mas ilustrado ó en el mas activo, y los jueces asisten al tribunal como por una mera ceremonia: ademas, sin comprometerse, sin llegar hasta la corrupción, pueden por una série de actos muy fáciles, porque son de omisión, no hablando, no advirtiendo, no esforzandose, favorecer una causa injusta.

Estas razones me parece de ingente fuerza, y yo no veo que la contestación reducida a la mera posibilidad de formar causa á un tribunal numeroso, disminuya su poder; aunque para calcularlas bien, lo mismo que para apreciar la justicia de nuestras encontradas opiniones, se necesitaria bajo este y los otros aspectos, no compararlas en sistemas divididos por una distancia mínima, sino en otros mas notablemente distantes. Figurémonos para todo, que no se trata de escoger entre tres y cinco, sino entre tres y quince, y entonces se verá á mayor luz de qué lado está la razon.

La tercera circunstancia de que ha hecho mérito la comisión, y que consiste en la proporcion de la simple mayoría absoluta en uno y otro sistema, es todavía de mas peso; y no obstante, ha sido considerada como “falsa,” como “paradójica,” como una “ingeniosidad sofisticada.” Veamos por qué. La comisión ha dicho, que “la probabilidad del acierto de una decision, puede calcularse de dos maneras ó computando aisladamente los votos del tribunal revisor, ó en relación con los de los jueces cuya sentencia revisa. En el primer caso, y en tribunales de número impar, como en los nuestros, en que se sentencie con la mayoría de dos á uno, la probabilidad, bajo esta misma proporcion, es mayor que la de tres á dos; está mayor que la de cuatro á tres, y así sucesivamente; de modo que se puede asentar con todo el rigor de una verdad matemática, que supuestas tales condiciones, la decision

tomada á simple mayoría, es tanto menos probable cuanto mayor sea el número de jueces.”

El Sr. Peña no conviene en el principio, y nos refuta de la siguiente manera. “Diré en primer lugar, que en las regulaciones de votos no deben hacerse cómputos esactamente matemáticos, porque los hombres y sus juicios, no admiten fracciones como las admiten los números en las operaciones aritméticas. Diré en segundo, que todo legislador, para dictar una disposición, no debe apoyarse en ingeniosidades que pueden calificarse de sofisticas, sino en especies y cosas naturales y claras, que estén al alcance de la comunidad. Esto supuesto, no dudo asegurar que una sala de cinco magistrados, siempre presentará al público el concepto de mayor probabilidad del acierto que una de tres, porque la autoridad estrinseca ó la mayor fuerza moral de una sentencia, siempre dependerá del mayor número de votos que concurran para dictarla, pues que los votos no se pesan sino que se cuentan al regularlos. Esta es una verdad obvia de suyo, que no necesita de pruebas grandes ni chicas para conocerse, porque está al alcance aun del hombre mas estúpido.”

“Su justicia y naturalidad resaltarán mas y mas, si se analizan brevemente los diversos casos que pueden ocurrir: supóngase que los cinco ministros de una sala están conformes en una votacion, y que tambien lo están los que componen la de tres. ¿Quién duda de que aquella primera conformidad tiene valor mayor que la segunda?

“Supongase que en la sala de cinco, uno haya disentido; nadie durará tampoco que la conformidad de los cuatro restantes que hicieron sentencia, tendrá mayor fuerza moral que la absoluta conformidad en la sala de tres; porque aun en el voto del que disintió acredita mas, y en cierta manera da mayor peso á la conformidad de los cuatro que se mantuvieron conformes, á vista, y en discusion tenida con el que disintió.

“Supóngase, en último caso, que en la sala de cinco disintieron dos, y uno en la sala de tres. Entonces la ventaja en una y otra sala es de un voto más, porque equilibrados ó empatados (como se dice) dos con dos en la primera, y uno con uno en la segunda, la ventaja en cada una de ambas salas es de un voto mas, que por eso hace sentencia. Pero eso es de notarse, que aunque en ambas salas la diferencia es igual por ser de voto, aun entonces la probabilidad del acierto está á favor de la sala de cinco, porque se supone haber mas contradiccion con los dos disidentes, mayor discusion, mayor ilustracion en los puntos cuestionados y menores peligros de parcialidad ó corrupción.”

La teoría es importante, necesita que la analicemos, aunque rápidamente.

Aquí, señores, todo el argumento consiste en confundir dos cosas que se deben considerar con separación en una sentencia: el número de jueces que concurren á dictarla, y el de los que convienen en la opinion que prevalece. Pues si se considerase únicamente lo primero, y hubiese un medio de hacer que todas las cuestiones se decidieran por unanimidad, los tribunales serian de veras mejores mientras fueran mas numerosos; porque es indudable que una sentencia de tres unánimes es mejor que otra de dos, así como la de cuatro es mejor que la de tres, y sucesivamente; pero como esta unanimidad es imposible, á no ser que ella se obtenga por algunos medios de violencia, que por ser tales desvirtúan el sufragio, así los matemáticos como los legisladores, han puesto todo su cuidado en obtener una cierta mayoría que pueda infundir confianza; y bajo este supuesto la teoría de la comisión, asegurando que en las sentencias dadas á simple mayoría, la sala de cinco ofrecia menos probabilidades que la de tres, ni es falsa, ni paradójica; es verdadera, es incontestable, ecsaminada con aquel criterio que no admite ningún género de disputa: es una verdad matemática, descubierta y proclamada por hombres á quienes no se puede calificar de sofistas. Hé aquí uno: "En los tribunales de ocho jueces, dice Laplace, en que se necesitan cinco votos para condenar, la probabilidad de error es de mas de uno sobre cuatro, mientras que si el tribunal fuera de seis y se necesitaran cuatro votos, la probabilidad de error seria menos de uno sobre cuatro, de manera que al acusado le convendría la reducción del número, aunque en uno y otro caso, la mayoría ecsigida sea la misma de votos. De donde se sigue que siempre que esta mayoría no se altere, la probabilidad del error aumenta con el número de los jueces, y el acusado se encuentra en una situación menos ventajosa, á medida que el tribunal es mas numeroso."

Pero este resultado es numérico, se me contestará, y ya se ha dicho que semejantes cuestiones no pertenecen al dominio de las matemáticas, porque los hombres y sus juicios no permiten fracciones, como las admiten los números en las operaciones aritméticas. De facto, hay causas que influyen, ó en el error ó en el acierto de las decisiones judiciales, como el conocimiento de los hechos, el buen juicio, el ánimo desapasionado, la ciencia, el amor á la justicia, la firmeza de carácter y otras de esta misma naturaleza, las cuales consideradas á priori se encuentran enteramente fuera del cálculo aritmético; pero cuando supuestas esas condiciones en un término medio, ó hecha abstraccion de ellas, se pregunta como aquí,

en qué razón el aumento de los votos á favor de un extremo por su diferencia con los del contrario, aumenta la seguridad del acierto, entonces este elemento aislado, el número de votos, es un elemento rigurosamente matemático, en cuyo cálculo puede procederse con la misma esactitud con que se procede en la resolución de cualquier otro problema de aquella ciencia. ¿Las matemáticas, señores, vienen á ser mas que la razón comun, espresada por medio de fórmulas esactísimas? Una ecuación algebraica puede, conservando su verdad, traducirse al idioma vulgar en la forma de un racionio comun, sin mas pérdida que la de la brevedad de su espresion; de manera que la ventaja del primer procedimiento consiste en que sus signos, su idioma, mas esactos que el comun, simplifican las operaciones y llevan a resultados que no se podrían obtener por el metodo comun, sin dotar á la inteligencia humana de la facultad que no tiene de abrazar con rapidez una série de relaciones complecsas.

Lo mismo sucede con el cálculo de las probabilidades. Laplace asegura que: “no es otra cosa mas que el buen sentido;” y como la cuestion presente es de las mas sencillas, de las que no necesitan los estensos conocimientos matemáticos, de que yo tengo la desgracia de carecer, procuraré manifiestar al senado cuán erróneo sea el concepto de que el voto de tres contra dos sea mas probable que el de dos contra uno, encargándome de la razon que se da para ello, que es la de la firmeza de cada uno de los jueces de la mayoría que persisten en su opinion despues de un debate contradictorio. Esta circunstancia efectivamente prueba que la opinion de esos jueces es mas meditada; pero no aumentaria el valor moral del fallo, sino en el caso de que despues de la discusion no quedara una razon igual por el extremo contrario. Mas cuando despues de ella, el juez que disiente se manifiesta tambien firme, si pesais la conviccion de cuatro que resisten á uno, pesad tambien la conviccion de uno que resiste á cuatro, y entonces tendreis que cada uno de aquellos votos no es superior á este por tal circunstancia. Al contrario, mayor firmeza de conviccion se necesita para sostener una opinion aislada, que para descansar en el apoyo y en la responsabilidad de la mayoría; y lo cierto es que en materias opinables donde hay division, hay duda. Ahora, para demostrar hasta qué punto llega el error de la consecuencia, supongamos un tribunal compuesto de treinta jueces, y dos sentencias, una de veinte contra diez, que es la misma proporcion de dos a uno, y otra de diez y ocho contra doce, que es igual á la de tres a dos. Pues bien: ¿no seria absurdo decir que esta sentencia de diez y ocho contra doce, era mas probable que la primera de veinte contra diez, cuando comparadas las dos mayorías ésta tiene dos votos mas que la de diez y ocho, cuando las diferencias con sus respectivas minorías son de diez en la

primera y solo de seis en la segunda? Pues señores, estos dos casos son los de una sentencia de dos tercios contra uno y de tres quintos contra dos: todo el procedimiento se reduce a buscar términos que den la misma proporción sin números fraccionarios. Este resultado sí que no necesita razones chicas ni grandes, y sin embargo no hay en él una forma matemática.....

Por lo demás, las comisiones jamás se arrepentirán de haber buscado uno de los fundamentos de su opinión en la autoridad de los sábios que han aplicado el cálculo á la decisión de los tribunales, porque aunque ellas no comprendan todos sus procedimientos, como tampoco entienden los cálculos astronómicos, saben que en la jurisprudencia, en la estadística, y hasta en las ciencias naturales, se han obtenido resultados maravillosos por ese medio; porque no pueden creer que hombres tan eminentes como Condorcet, Lacroix, Laplace, Poisson, Arago y tanto otros, estuvieran á la faz y con el aplauso de todas las academias de Europa, cometiendo el insensato error de aplicar sus cálculos á una materia incapaz de sujetarse á tales procedimientos, porque saben que aun los jurisconsultos han recurrido á la ciencia de esos mismos hombres: que Condorcet escribió su obra por instancias del ministro Turgot, y que después fué consultado por la comisión que en la asamblea nacional se formó para organizar los tribunales; y que en otras asambleas muy doctas sus cálculos han sido escuchados con respeto.

Permitásenos esta defensa para satisfacer al senado de que no vemos venido á esponerle paradojas, ni ingeniosidades sofisticas, y veamos la cuestión bajo un punto de vista puramente legal, pues conocemos cuánto vale el ejemplo de los legisladores que nos han precedido, y estamos muy lejos del empeño de trastornar en un día y de una plumada toda la legislación. Precisamente por eso dije hace muy poco, que los legisladores, mucho antes que los matemáticos, habían cuidado, y con el mayor empeño, no tanto del número de los jueces, cuanto de la mayoría de los votos que se necesitaban para condenar; y esta circunstancia, que ya observé cómo se confunde para impugnarnos, es aquí todavía de mayor importancia, porque nos muestra el verdadero camino del acierto, y porque con ella en la mano todo el peso de la autoridad de los legisladores nacionales y extranjeros que se citan para confundirnos, viene precisamente en apoyo de las teorías que defendemos.

¿Qué es, sino lo que pasa en Inglaterra, cuna y quizá todavía modelo de las instituciones judiciales? Yo no sé que allí se hayan ocupado mucho

de si los jurados debían ser diez, doce ó mas, y es incontestable que la ley que allí se considera como el paladium de la seguridad privada, es la ley que para el fallo requiere la unanimidad. En la Francia, tan sábia como es, tampoco se ha disputado si los jurados serían ocho, diez, ó doce; pero cada vez que se ha tratado de escigir una mayoría de tres cuartas, de dos tercios ó de siete doceavos, ha habido un acalorado debate, en la cual los defensores de las garantías sociales han levantado su voz para advertir que mientras la mayoría fuese menor, el número de inocentes condenados sería proporcionalmente mayor. En una discusión de esta clase, despues del atentado de Fieschi, el célebre Arago combatía el proyecto de que el voto de siete contra cinco fuera bastante para declarar reo al acusado, y esponía cálculos muy curiosos. “En la hipótesis, dijo, de que la determinacion de un jurado sea decidida por siete entre doce, segun propone el proyecto de los ministros, vdes. hallarán muy terrible el resultado del cálculo: las probabilidades de error en tal caso estan en proporcion de uno á cuatro: no manifiesto las operaciones, porque parecería que estaba haciendo un discurso á mis discípulos; pero puedo asegurar que las he formado imparcialmente, y sobre los mas exactos principios matemáticos. Y en esto, á la verdad, no hay mérito alguno porque nada puede darse mas sencillo. Pero la justicia ecsige admitir que el error del jurado, sobre el plan del proyecto, puede estar tantas veces á favor como en contra del acusado; de modo de que si en lugar de la proporcion de uno á cuatro, suponemos que la probabilidad de error contra el acusado, en la mayoría de siete contra cinco, no es mas que en proporcion de uno á ocho ó aun de uno á diez, la consecuencia en rigor matemático, que es demostracion, será que entre diez hombres mandados al suplicio, uno perecerá inocente. Segun la ley actual del jurado en Francia, que requiere la mayoría de ocho contra cuatro, la probabilidad de error está solo en proporcion de uno á ocho, mas pudiendo ser ese error á favor ó en contra del acusado, supongamos que la proporcion es solo de uno en diez y seis. Ahora, pues, segun la ley actual, tenemos la probabilidad de que muera un inocente entre diez y seis ajusticiados. ¡No basta esto, señores! Aun en el sistema inglés de unanimidad, puede ocurrir error, porque la mente, humana está en todas partes espuesta á errores; pero en el jurado inglés la proporcion es infinitamente menor, porque viene á ser justamente de uno á ocho mil.” Estas palabras fueron oidas con respeto; y aunque triunfó la ley propuesta por el ministerio, se inventó contra la sentencia dada por simple mayoría, un recurso especial. Despues, establecida la república, ha vuelto á ecsiguirse la mayoría de ocho, al tiempo mismo que el número de ministros del supremo tribunal nacional se ha reducido en la última constitución. ¡Tan cierto así es que la multiplicidad

de los jueces cada día pierde más terreno! Y en España también, señores, en España, cuyos códigos tienen más de un título para ser admitidos del jurisperito y del filósofo, el legislador ha buscado igualmente la garantía, no en que los tribunales se compusieran de cinco jueces, como se ha querido sostener, sino en que la condenación resultara de un número respetable de votos y para convencernos de ello, basta registrar esos códigos. La ley 5.a, tít. 16, lib. 2 de la Recopilación, exige que “en el sentenciar los alcaldes de la corte las causas criminales, sean tres concordantes;” y la 40 del mismo título y libro, es todavía más expresa. “Es nuestra merced, dice, y mandamos que en las causas criminales todos los dichos nuestros cuatro jueces alcaldes, se junten para sentenciar y condenar ó absolver definitivamente, ó lo menos sean tres alcaldes, y no pueden ser menos; y si en nuestra corte no estuvieren tres alcaldes, que los del nuestro consejo pongan y disputen otras tantas personas de entre ellos mismos cuantos alcaldes faltaren hasta en número de tres, y lo que estos sentenciaren y mandaren, que aquello se sujete, y que de ello no haya ni pueda haber apelación.” Otra ley española, la 1.a, tít. 7 lib. 2.º del mismo código, estableció también que en las chancillerías de Granada y Valladolid hubiera tres alcaldes para que decidieran en apelación y súplica las causas criminales, con calidad de que en las de muerte, mutilación, pena corporal ó de vergüenza, fuesen los tres votos conformes, aunque en las demás de menos gravedad bastara el voto de la mayoría y la firma de los tres. Y esa misma cédula de los cinco señores, citada con tanto aparato en esta discusión, no decía más; porque si bien es cierto que allí se exigía para la imposición de estas penas por las audiencias la concurrencia de cinco ministros, se exceptuaron las de Asturias, Mayorca y Canarias, y todas las de América, menos las de Lima y México, declarándose que en todas estas bastará, son palabras de la cédula: “que en su número (el de los jueces) no baje de tres, que son los que se necesitan, estando conformes de toda conformidad en sus votos, para hacer sentencia en los pleitos civiles de mayor cuantía y en las causas criminales en que tenga lugar la imposición de pena capital.”

¿Y así, señores, se ha dicho que la vista de una causa por cinco jueces ha sido en la legislación española un punto elemental, una garantía inviolable para todos los tribunales; tratándose de la vida del último de los vasallos? ¿Y sobre este supuesto, combatido por los mismos monumentos en que se apoya, se nos escoge para formar contraste, á nosotros, que con todos nuestros errores y nuestro escaso saber, hemos sido siempre zelosos defensores de las garantías individuales?

¿Ni por qué, aun cuando tal institución fuese mala, nos tocaría la responsabilidad de la invención? Desde la independencia ¿no han existido en todos los Estados salas de tres jueces para todos los negocios? La ley de administración de justicia de 1837 ¿no estableció en todos los departamentos salas de solos tres magistrados, sin que en diez años se dijera por esto que los mexicanos independientes vivían sujetos á una condición mas infeliz que la que tuvieron bajo la dominación española? ¿Ahora mismo no se están ejecutando sentencias de muerte dadas por la suprema corte en sala de tres? Pero no aumentemos los ejemplos, señores; basteme ya solo presentar uno muy reciente, y cuya autoridad me parece irrecusable. El gobierno quiso que la suprema corte de justicia, asociada con dos jueces de letras y el señor rector del colegio de abogados, le presentase el proyecto de una buena ley de administración de justicia criminal; en este proyecto presentado el 4 de Mayo del corriente año, se lee el siguiente artículo: “Esta sentencia (la de vista) causará ejecutoria siempre que confirme la del juez inferior por mayoría de votos, ó la revoque por conformidad absoluta de los tres que componen la sala. Mas si la sentencia fuere de pena capital, para su confirmación se requiere también la conformidad absoluta de votos.” He aquí cómo esta comisión muy digna, estos letrados, entre cuyas firmas está la primera la del Sr. Peña y Peña, consideraban que sin necesidad de tres instancias ni de sala de cinco, bastaban dos instancias y cuatro votos para la imposición de la pena capital, y las mismas instancias, y solo tres votos para cualquiera otra; asegurando, y con mucha razón, en la parte espositiva, que “estas reglas eran las mas liberales y equitativas,” son sus propias frases, “y que ellas prestaban toda la seguridad posible y toda la certeza moral necesaria..... de manera que no podía hacerse mas en solicitud del acierto.”

Siento haberme extendido en una materia de poco interés para la cuestión; pero no podía dejar pasar las teorías que he pretendido refutar; y lo siento, porque aun cuando nada de lo dicho fuera cierto, no por eso debería reprobarse el artículo que se discute, porque de reducir á nueve el número de ministros numerarios de la suprema corte, no se sigue, como se ha supuesto, que ya no podría haber sala de cinco que conociera de los negocios en que se estimara conveniente ese número: al contrario, existen diversas combinaciones, de las cuales ninguna es inferior á la actual y muchas son superiores en que podría conservarse la sala de cinco, sin mas número que el de nueve ministros propietarios. El senado me permitirá que entre en esta materia de grande interés, si considera que ella envuelve puntos muy vitales de la organización judicial.

Las comisiones, no solo consideraron la probabilidad del acierto de un fallo, por la relacion de los votos de los jueces que forman la sala, sino por su comparacion tambien con los votos de las otras salas que han debido conocer en las anteriores instancias; bajo este aspecto anunciaron que nuestra organizacion estaba muy mal calculada, é indicaron la necesidad de establecer una reforma útil “ó la abolición de la tercera instancia, ó la adopción de un sistema, por el cual las sentencias de la segunda solo quedasen revocadas cuando hubiera contra ellas un número mayor de votos, ó votos que tuvieran á su favor mayores presunciones de acierto; ” pero esta reforma que considero de un interes muy superior al de la cuestion que he querido ecsaminar antes, tambien ha sido tratada con desprecio, asegurándose “que nada tiene por qué tildarse nuestra legislacion, ni por la multiplicidad de las instancias, ni por la multitud de los magistrados, ni nada por lo mismo que merezca innovacion sobre este punto, mayormente si se compara con la de otras naciones civilizadas.” ¡Ojalá que este juicio fuese cierto! las comisiones quedarian convencidas de ignorancia y ligereza; pero nuestro pais ganaria mucho con solo eso. Analicemos.

De lo antes espuesto se sigue de una manera incontestable, que ecsiste un principio, en el cual todos convenimos; un principio que nadie ha puesto ni ha de poner en duda, y es el de que en materia de decisiones tomadas por cuerpos colegiados, la presuncion del acierto está en favor de la mayoría absoluta; y así, señores, si hubiese una ley que organizando un tribunal de once, permitiera que fuese sentencia el dictámen de cinco contra seis, ó aun el de cuatro contra siete, se diria por todos, y con mucha razon, que era esta una institucion inicua, que la justicia quedaba sin una sola garantia, que el legislador parecia haber buscado el modo de ultrajar la razon; pues sin embargo, la fuerza de la preocupacion es tal, que teniendo nosotros una institucion idéntica, no la rechazamos. Porque ello es así; que la combinación actual de las tres instancias facilita este triunfo de las minorias; es indudable, es aritmético. Supongamos si no un negocio en que haya dos interesados, A y B: en primera instancia A tuvo dos votos, y B uno: en segunda, A dos, y B uno: en tercera, A dos, y B tres: B triunfa por cinco votos contra seis, y lo mismo sucede cuando en la tercera instancia, por unanimidad de cinco se reprueba la sentencia dada en primera por unanimidad de tres, y confirmada por otros tres en segunda. Pero como esta sentencia de tercera instancia se forma con tres votos, es claro que nuestra legislación permite que prevalezcan cuatro votos sobre siete, y tambien tres sobre ocho. ¡Y esta es la legislacion que en nada tiene que reformarse! ¡En el ejemplo anterior nos aterrorizaba la idea de que el voto

de cuatro pudiera prevalecer sobre siete, al decidir de la propiedad, de la vida, del honor; y aquí se hace una combinacion de instancias, se altera la forma, y pasamos porque tres prevalezcan sobre ocho! ¡Cuan cierto es, que el espíritu mas ilustrado se somete á las contradicciones mas chocantes!

Como tan grave mal no puede ser negado, en apoyo de la organizacion de que procede, ha sido necesario buscar una contestacion plausible y únicamente se han encontrado estas dos razones: primera, que estos pormenores quedan en secreto, y el público solo sabe que cinco, reprueban lo que hacen tres; y segunda, que aquellos casos son raros y extraordinarios, y que las leyes no se hacen para ellos. Pero ni es cierto que sean secretos los pormenores de una votación porque se revelan completamente si las partes usan del recurso de responsabilidad, ni las leyes tutelares de la inocencia y justicia buscan efectos de imaginacion, sino una seguridad verdadera y positiva. Para valernos de los ejemplos ya citados. El turco puede resignarse á la espeditiva justicia del gran señor, creyéndolo el representante de la divinidad: el frances sostendrá con esfuerzo que él no puede ser condenado, sino por la mayoría de ocho votos contra cuatro; y el inglés se enorgullece, considerándose el hombre mas libre de la tierra al recordar que su condenacion no puede ser posible, sino cuando concurra la unanimidad de los doce jurados; y aunque de estos tres el turco sea indudablemente el que mas persuadido esté de la justicia de su país, no será por esto tal justicia la que un legislador ilustrado se propondrá jamas por modelo.

En cuanto á lo raro ó extraordinario de esta combinacion funesta, ella es mas frecuente, mucho mas temible de lo que parece, si se considera que la minoría prevalece sobre la mayoría, no solo cuando la tercera instancia revoca dos sentencias conformes, sino tambien cuando discordes éstas decide á simple mayoría en favor de una contra otra que hubiere sido dada por unidad, y contará con un voto en la instancia, cuyo fallo confirma. Y ademas, porque una iniquidad sea remota ¿deja de ser mala la ley que la permite? En materia judicial los legisladores han querido evitar el mal por remoto que fuese; han preferido la impunidad de muchos criminales al castigo del inocente, y esta regla es la misma, cuando la garantía consiste en la organizacion de los tribunales, y cuando se busca en la calificacion de las pruebas. Quitemos el principio, y si admitimos la minoría en los tribunales, ¿por qué no lo admitimos en los testigos? ¿Por qué nos detendriamos ante las pruebas escepcionales? Las comisiones han creído perfectamente justo el sentir del sabio Condorcet, cuando ecsaminando la organizacion de los tribunales franceses en la que antes de la revolucion

existía el mismo vicio, decía: “Pero el inconveniente que traen consigo estas formas complicadas, esponiéndonos á que prevalezcan las disposiciones de la minoría, basta para desecharlas totalmente, aun cuando se estuviera seguro de que ese caso no llegaría..”

Ni ha sido en el senado de México donde por primera vez se han notado estos inconvenientes. Precisamente al discutirse en las córtes españolas esa ley de administracion de justicia del año de 41, los Sres. Dau, Creux y Mejia, espusieron la objeccion, y ella hizo tanta fuerza, que la comision no pudo contestar, que despues de una discusion que consta que fué larga y complicada, aunque no se conserva, se volvió el dictámen, y que á poco la misma comisión presentó otro en que confesaba no poder remediar el mal. “Si aun así no fuere el artículo del agrado de algunos señores; dice el dictámen, la comision afirma que no hay combinacion alguna que baste á satisfacer sus intenciones. Si quieren acallar las quejas que se supone formarán los litigantes, poque un menor número de votos, en la tercera instancia, destruye lo que habia decidido un mayor número en la primera y segunda, es preciso que se desengañen es tan imposible, á menos que se ecsija uniformidad de dictámenes de todos los jueces, lo que es un imposible tambien. Supóngase que de dos sentencias conformes, dadas la primera por un juez y la segunda por cuatro, se apele á la sala de tercera instancia, compuesta de cuarenta ministros, y que de estos, veintiuno revocan las dos sentencias y diez y nueve las confirman. El que tuvo á su favor el voto de estos últimos cuenta ya con veinticuatro: ¿y quedará tranquilo con que un número menor, aunque grande, le despoje del derecho que creia haber adquirido ya?” La comisión decía bien: admitida la tercera instancia, no hay forma que prevenga el peligro; pero de aquí no resulta que se debia pasar por tal organizacion; se inferia solo que era preciso buscar nuevas combinaciones que lo evitaran, se seguía que era conveniente suprimir una instancia, como la mayoría de las comisiones lo han indicado ya. Suplico al senado que sin arredrarse con esta novedad de cincuenta años, me permita defender una reforma que en los paises donde mas se han estudiado estas materias, ya no tiene contradictores, poque no hay una sola razon buena para impugnarla.

De facto, señor, se comprende muy bien la necesidad de que las sentencias de los tribunales de primera instancia sean apelables, porque es imposible organizar estos tribunales de tal manera que den cuantas garantías es posible reunir á la imperfección humana, y porque una nueva discusion ante un mayor número de jueces de que se suponen mas experimentados, puede rectificar un error. Pero cuando el negocio vaya

á las capitales y se decida ante los tribunales supremos, ó la tercera instancia no da mas garantías que la segunda, y entonces es inútil y gravosa, ó la tercera instancia no da mas garantías que la segunda, y mas garantías provienen necesariamente de algunas circunstancias mayor, formas mas acertadas ó jueces con mas saber; y entonces ¿por qué no colocarlas en la segunda instancia? ¿Que objeto racional tienen esos fallos, que ni resultan de la inmediata instruccion del proceso como los de primera instancia, ni los dirimen como en la tercera; esos fallos que no pudiendo causar ejecutoria en ningun caso, gravan á las partes con gastos y dilaciones sin resultado, y las esponen á que prevalezca el dictámen de la minoría?

Para comprender su existencia, es necesario atender á su origen histórico, y mirar en la institucion de cada nuevo recurso la complicacion del sistema feudal con los privilegios de las ciudades y el acrecentamiento del poder real. En aquel estado social, la organización de los tribunales no tenia como principio único el acierto de sus fallos, sino la jurisdiccion y el poder de quienes lo establecian ó lo formaban; y así la complicacion que estas causas introdujeron, debió desaparecer cuando la revolución dió al poder un título único, “la voluntad de la nacion,” y á la ley un solo objeto, “el bien público.” En Francia, por las mismas causas que en España, las jurisdicciones eran todavía mas complicadas, y allí cuando la asamblea nacional decretó la completa reorganizacion judicial, Thouret estableció como uno de los principios de la reforma, este: “que en ninguna causa hubiera mas de dos instancias,” ese principio fué admitido y aprobado sin contradiccion en aquel cuerpo, donde se reunieron tantos talentos, y un saber tan profundo y desde entonces esa simplificación de los procedimientos se ha conservado intacta, á pesar de todos los cambios políticos que se siguieron porque todos lo consideraron como una mejora preciosa. ¿Carécen por esto los franceses de garantías sociales? ¿Y la comision merecerá que se le diga que legisla dando tajos y reverses, porque indica o que está adoptado en uno de los pueblos mas ilustrados del mundo, y cuando cuenta con el apoyo de sábios de primer orden y de una esperiencia favorable de medio siglo?

Sobre este punto no puedo menos que advertir la equivocacion muy notable en que ha incurrido el Sr. Peña, citando a Fritot en favor de nuestras tres instancias. Despues de manifestar este publicista cómo las instituciones liberales traen consigo la lentitud y escrupulosidad de los procedimientos judiciales, dice lo que sigue, segun lo ha copiado el Sr. Peña: “En el dia se ha conseguido el término medio en materias civiles, correccionales y de policia, y algunas veces en materia de cuenta y razon administrativa y

contenciosa. Es un punto de legislación benéfico y saludable el que admita los tres grados de jurisdicción, cuales son, la vista en primera instancia, la apelación y el recurso en casación, por vicio de forma ó violación de la ley. Digan lo que quieran los detractores de este nuevo orden de organización judicial, es de esperar que cada día se verá consolidarse y fortificarse mas y mas, y al fin que admitirá toda la extensión de apelación que deben recibir los principios en que está fundado. Acabamos de decir que los tres grados de jurisdicción existen en materia de policía, en materia correccional, no menos que en la civil; pero si son necesarios para el fallo de delitos simples, cuya convicción no trae consigo mas que unas penas ligeras, ¿por qué no lo son cuando se trata de la aplicación de penas aflictivas é infamantes, y aun de una sentencia á pena capital? Sobre este punto puede nuevamente preguntarse ¿si el honor y la vida de los hombres son menos preciosos que su libertad y que sus bienes?”

“Hé aquí vindicadas abiertamente, dice el Sr. Peña, con la doctrina fundada de este célebre publicista extranjero, las legislaciones española y mexicana, sobre este punto de las instancias judiciales...” Mas yo entiendo, señor, que aquí en vez de estar confirmado nuestro sistema, se halla confirmado el que el Sr. Peña impugna; porque Fritot propone como modelo, la primera instancia, la apelación y el recurso de casación que es el de nulidad, y no una tercera instancia, á no ser que nosotros tengamos cuatro. Y la misma equivocación se ha padecido al citar á Macarel, quien también propone un juez único de primera instancia; un tribunal de segundo grado, y un supremo tribunal de nulidad, según resulta de las palabras copiadas por el Sr. Peña: “La opinión, pues, de estos autores imparciales, está reducida á lo siguiente. Importa con especialidad que se desempeñen dignamente los empleos judiciales, y que para ello se ponga en el nombramiento el mas escrupuloso cuidado; que siendo corto el número de tribunales y de miembros en cada uno de ellos, puedan ser de mucha trascendencia las ventajas de los magistrados, y se asegure la consideración de estos por medio de miramientos que perderían su valor si se prodigasen; que seria preferible no atribuir en cada jurisdicción sino á un solo juez la decisión de todas las causas, cuando menos en primera instancia; pero que en general es indispensable que el número de magistrados sea el mas corto posible..... Un tribunal supremo que mantenga la uniformidad en la aplicación de las leyes, anulando las sentencias que les hubieren menospreciado ó violado. Finalmente, en toda la extensión del territorio, jueces de recurso primero á proximidad de los demandantes: jueces de segundo grado que estén mas distantes de estos, y por todas partes el mas corto número posible de magistrados en cada uno

de estos juzgados.” En cuanto á Meyer, no lo he podido consultár; pero Macarel presenta su opinion como del todo conforme con la que él adopta.

Mas las tres instancias, se replica, son necesarias, porque cuando las dos primeras no están conformes, ninguna puede prevalecer siendo ambas dictadas por un mismo número de ministros de un mismo tribunal; y porque así como en el poder legislativo es conveniente la division de las cámaras, lo es en el judicial la revision de una misma sentencia por diversas salas. Estos son los dos únicos argumentos que se nos hacen, ademas de la oposición de las citas que acabamos de ver: á los dos contestaré, aunque con el temor de ser demasiado molesto. Por lo que hace al primero, se ve desde luego que no se encuentra razon para la tercera instancia, cuando la primera y segunda sentencia hayan sido conformes: esta seria ya por lo menos una reforma muy digna de aprovecharse; y se ve tambien que el argumento se saca solo de la necesidad de decidir entre dos autoridades iguales, de manera que, si como yo propongo, se organizara la segunda instancia de un modo diverso respecto de la primera, y se reunieran en ella cuantos elementos de acierto pudieran buscarse despues en la tercera, cesaria del todo el motivo que se alega: estas dos sentencias nunca serían de igual peso; y la segunda prevaleceria siempre, con la ventaja de que en esta combinacion será imposible un mal que no tiene modo de salvarse con la tercera instancia; á saber, el que prevalezca el sentir de la minoría contra el de la mayoría. Todo sistema debe por otra parte tener consecuencia; y si admitimos como necesaria una tercera instancia para decidir entre dos sentencias contrarias cuando las dos primeras están conformes y la tercera revoca, en este caso, ¿por qué no admitimos una cuarta que decida entre estos dos pareceres de fuerza tambien muy equilibrada? Yo confieso francamente, que si ha de haber tres instancias por la primera razon espuesta, no concibo por qué no deba haber cuatro y aun cinco.

Ahora, respecto del argumento de analogía, que es por lo general el mas débil de los argumentos, contestarémos: Primero, que entre la organizacion de los tribunales y la de los cuerpos legisladores, hay tan enormes diferencias, que ninguna analogía puede fundarse. El legislador, haciendo la ley, crea los derechos y manda para lo futuro: el juez no tiene mas que aplicarla á un hecho pasado y que respetar un derecho preecistente; de donde se sigue que mientras uno no ve mas que la cuestion abstracta, el otro contempla siempre un hecho particular; que el legislador hace todo lo que le parece conveniente, y el juez solo lo que es justo; que el uno á nadie responde, y que el testo y la pena de la ley amenazan siempre al otro; que el juez debe ser desapasionado y perpetuo, y el legislador, espresion

inteligente y elevada de las opiniones y las necesidades de su época, es necesario que cambie con estas. Segundo, que la división de las dos cámaras no tiene por objeto ni una nueva discusión, ni el apoyo de mayor número de votos, sino que representa lo que los tribunales jamás tendrán que representar; la división de las cámaras representa la división de intereses y tendencias que impulsan a las sociedades, y se establecen en las repúblicas para templar el empuje de la democracia, y conservar el espíritu y las tradiciones del gobierno en un cuerpo moderador. Tercero, que si la analogía fuera buena, ella confirmaría la necesidad de dos instancias, no la de tres, puesto que no hay tres cámaras. Y por último, que tampoco hay analogía entre el modo de formar una ley y el de dictar una sentencia; porque para la ley se exige la conformidad de los dos cuerpos legisladores y aun la del ejecutivo, y esta puede muy bien no darse: respecto de la sentencia, como no es posible dejar sin ella un proceso, es forzoso resignarse a que prevalezca el último parecer, aunque esté en contradicción abierta con los otros; y así, tenemos averiguado que es necesario concentrar todos los medios de acierto en este tribunal último.

Y si esto no es así, vuelvo a preguntar, ¿para qué se grava a los litigantes con dilaciones y costos muy considerables, si lo que han de obtener es solo una sentencia que en ningún caso ha de causar ejecutoria? ¿Para qué se conserva una instancia que de nada sirve, y que trae consigo el enorme, el imponderable mal de no poder impedir que prevalezca sobre la mayoría el dictamen de la minoría...? Yo no lo sé; más lo que veo es que en los juicios sumarios y en los ejecutivos, no hay tercera instancia, y sin embargo nadie se queja de que en ellos falten garantías; y veo más, que esas mismas leyes, cuando se versa el interés de cuatro mil pesos, permiten suplicar de la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera: en caso idéntico, niegan ese recurso si la causa es criminal: ¿acaso un hombre necesita más garantías cuando se compromete tal vez una parte pequeña de su fortuna, que cuando se decide de su honor y de su vida? Sin embargo, todo esto subsiste, porque el hombre se familiariza con lo que ve todos los días, porque la preocupación gobierna el mundo.

Pero los abusos, y con más motivo las simples preocupaciones, no tardan en ceder después que se les ha atacado con las armas poderosas de la razón; y así yo espero que antes de mucho tiempo la abolición de nuestras terceras instancias nos dé derecho para decir que estamos en este punto al nivel de los principios de la buena legislación, y de los ejemplos de las naciones más civilizadas.

Mas no por esto pretendemos, señores, tampoco que semejante reforma se decrete desde luego, ni ella es la consecuencia de la reducción propuesta, porque sin mas que nueve ministros fijos ó numerarios en la suprema corte de justicia, se puede todavia conservar la tercera instancia, y una sala de cinco adoptando cualesquiera de estos tres medios, que desde luego ocurren: la superecion de las primeras instancias en la corte para que pasen ante los jueces de distrito; la formacion de salas evitarias para los asuntos que han de tener tres instancias, todas en las salas del mismo tribunal; y por último, la agregacion de dos ministros supernumerarios para la tercera instancia, en los casos en que hayan conocido en primera y segunda salas de tres. Porque sin trabajo se advierte que en los negocios que la constitucion someta á la suprema corte de justicia, de unos conoce en tercera instancia, ó en una única, como los recursos de fuerza y las competencias, de otros en segunda y tercera; de otros en las tres, y la necesidad de once ministros, sin duda no puede referirse á los negocios de la primera clase, porque en ellos solo se necesitan cinco; ni á los de la segunda en que hay, con ocho, tres para la segunda instancia y cinco para la tercera; y así queda reducida á los de la tercera clase, en los cuales, impedidos ya seis magistrados en la primera y segunda, para la tercera, no quedan espeditos mas que tres; y para salvar esta dificultad, por mas que se diga, los medios indicados no ofrecen inconvenientes.

De facto, ¿por qué no se podrian quitar á la suprema corte las primeras instancias, para confiarlas á los juzgados de distrito? La constitución espresamente lo permite; y de ello resultarian las ventajas de poner mas distancia entre el juez que sustancia y el que revisa, porque es una verdad que un tribunal encargado constantemente de revisar las operaciones de otro, tiene, respecto de aquel, una inspeccion mucho mas severa y saludable que cuando dos tribunales, lo cual sucede ahora con las salas segunda y tercera, están siempre revisandose mutuamente sus fallos: los negocios se repartirian de una manera mas igual, y la administracion de justicia se haria mas espedita y cómoda, colocando jueces en el lugar donde ocurren los casos; en vez de que ahora es preciso venir á la capital desde la primera instancia para poner demanda contra un Estado, y para litigar sobre un contrato hecho por órden del gobierno, aunque el interes que se verse sea muy corto. Pero se dice que es necesario conservar las primeras instancias en la suprema corte porque allí es donde únicamente puede formarse el proceso de los grandes funcionarios de la federacion. A esta objecion, que se presenta con fuerza, contestaré: que en los delitos de oficio, investido el senado con el carácter de jurado de sentencia, ya no hay tres instancias, sino solo la reunion de una sala para aplicar la pena, de manera que aun

cuando de esta declaración se admita recurso, bastará, conforme á la ley aprobada por el senado, la existencia de dos salas; y que por lo que hace á los delitos comunes, éstos son tan raros, que para causas de las que pasan muchos años sin que se presente una, no se necesita tener un tribunal permanente. Me parece que en Inglaterra y en los Estados Unidos, despues de declarar que ha lugar á formacion de causa, cuando se trata de delitos comunes de los altos funcionarios, se pasa el asunto á los jueces naturales del acusado.

Mas si tampoco se quiere innovar en este punto, si se desea que ciertos negocios comiencen en el alto tribunal de la federacion, desde su primera instancia, ¿qué necesidad hay de que esta instancia pase ante un tribunal colegiado? En nuestra legislacion, en casi todos los negocios, la primera instancia pasa ante un juez único, y así es muy conveniente, porque se espedita la sustanciacion, que es su objeto principal: en la misma suprema corte vemos que en las primeras instancias se faculta al semanero para la práctica de las diligencias, lo cual indica el inconveniente de un tribunal colegiado para la primera instancia. ¿Por qué no se admitiria que el mismo fallase, puesto que su sentencia tenia que ser revisada por otras dos salas, una de tres y otra de cinco? Aunque no seria esta la organizacion que yo mas desearia, entiendo que ella no puede ser objetada por los partidarios de las tres instancias y las salas de cinco.

Y si llevando la oposicion al último extremo, tambien esto se desechase; si se rehusara suprimir la tercera instancia, que no es mas de una preocupacion sin crédito ya en los paises mas ilustrados; si insistimos en conservar como un sistema perfecto nuestras tres instancias con sus tres ministros las primeras, y sus cinco la última, como están hoy, para que continuara esa funesta facilidad de prevalecer el dictámen del menor número, tampoco en ese extremo se necesitarian los once, porque en la tercera instancia podrían agregarse dos supernumerarios: esta medida no introduce novedad: es precisamente lo dispuesto en el art. 35 de la ley de 14 de Febrero de 826. “En toda causa, sea civil ó criminal, concurrirán precisamente cinco jueces en tercera instancia, *asistiendo para ello los dos ministros menos antiguos de la primera sala*, si la segunda ó tercera fueren las que hubieren de conocer.” Y no se nos diga señores, que este arbitrio es un efugio sin sustancia y de puras voces y términos, porque siendo diaria la necesidad de la sala de cinco, los supernumerarios se convertirian en fijos; ya hemos visto que para negocios que no tienen en la corte tres instancias, y tales son las competencias y los recursos de fuerza, bien puede haber constantemente sala de cinco con los propietarios:

de aquí es que solo se necesitaría recurrir á los supernumerarios para las terceras instancias de los negocios que han comenzado en el mismo tribunal; y lejos, muy lejos de que este sea un caso diario, esos negocios, los espresados en el art. 22 de la ley citada, ocurren muy de tarde en tarde, tanto que hasta hoy, en veinticinco años, yo no sé de uno solo que haya llegado á la tercera instancia. Y repito, ¿sería justo conservar constantemente dos ministros para cuando llegase un caso tan raro, que de 824 a acá todavía no ocurre?

He aquí, señores, lo que teníamos que contestar á cuantas objeciones se nos han hecho.

¿Y por qué, se nos preguntará, tanto empeño en defender este artículo, en introducir tal reforma? La respuesta es muy fácil, y tan obvia, que todos adivinarán mis palabras. Las comisiones no tiene empeño en este artículo ni en ningun otro: cumplen con su deber, proponiendo lo que entienden ser mejor; y si el voto de aprobación del senado lisonjea su amor propio y les inspira la satisfaccion de haber contribuido al bien, están muy persuadidas de la justificacion y sabiduría de la misma cámara, para no respetar su decision cuando es contraria. Las comisiones pusieron este artículo con el empeño de no aumentar las erogaciones del erario, ahora que tantos despilfarros en algunos ramos y tantos desaciertos administrativos, nos han traído á un estado de bancarrota que hace necesarias las economías en todos; y la consultamos todavía mas, que por esta razon de economía, porque aumentando un tribunal cuatro ministros supernumerarios y un fiscal, queríamos, en bien de la magistratura, que fuese posible y fácil llenar estos puestos eminentes con hombres que siguieran honrándolos con su saber y sus virtudes; lo cual se hacia difícil, porque para nuestra vergüenza, la magistratura ha venido á ser una carrera de miseria y de sufrimiento, por mas que el mal y su remedio estén indicados desde el congreso constituyente de 842. Quisimos, como recomienda Macarel en el testo citado por el Sr. Peña, que siendo corto el número de tribunales y de miembros en cada uno de estos, pudieran ser notables las ventajas de los magistrados, y se pudiera tambien asegurar la consideracion de éstos por medio que perderían su valor si se prodigasen; y hemos insistido en que este era el tiempo mas oportuno para semejante reforma, porque hoy tenemos una circunstancia rara, que no se repetirá en mucho tiempo, y que la facilita: la circunstancia de que habiendo tres ó cuatro vacantes en la Suprema Corte de justicia, la reforma no ofende ningunos intereses, ni aun siquiera destruye las esperanzas; mientras que si se decretara el nombramiento de los cuatro supernumerarios sin reducir el

número de los propietarios, aunque el legislador quisiera arreglar mañana la organización judicial con mayores economías, le sería muy difícil, si no imposible adoptar la reforma, porque ya se sabe todo lo que pueden esta clase de consideraciones. Y esta razón, señor, es de tanto peso para mí, que si tuviera alguna duda acerca de las razones que he espuesto y que se me presentan con toda la fuerza de la verdad, bastaría ella sola para decidirme; porque si erramos reduciendo a nueve el número de ministros, todos los días son buenos y todas las ocasiones favorables para crear nuevos empleos, mientras que si el error está de parte de los que pretenden que haya once ministros, perdida esta ocasión la reforma será imposible, porque encontrará siempre con el respeto debido a los intereses creados y con la resistencia de un cuerpo poderoso, por lo que el error sería irreparable.

Ahora, después de empeñado el debate, las comisiones lo han sostenido sin espíritu de sistema y muy distantes del deseo de entrar en polémica; pero precisadas a satisfacer al senado de que en el desempeño de su augusta confianza, no han procedido con ligereza, y deseosas también de que su ignorancia no atrajese sobre toda la cámara la desfavorable opinión de que los proyectos de ley que se le presentan por sus comisiones, son tan insensatos como se necesitaría que lo fuesen para que ellos merecieran calificarse de cavilidades sofisticadas, de estupendas novedades y de doctrinas contrarias al espíritu de toda buena legislación. Y como precisamente estaban de su parte la teoría filosófica que ilustra las cuestiones de legislación, el apoyo de hombres eminentes en la ciencia, el ejemplo de las naciones que se hallan a la vanguardia de la civilización, y el espíritu mismo de nuestras leyes, nos ha sido y nos será preciso abogar por tan buena causa, con la decisión que producen el convencimiento de la verdad y el deseo vivísimo de introducir mejoras en uno de los ramos de la administración pública que más las necesita entre nosotros. Si no me equivoco, he logrado manifestar que reducido a nueve el número de ministros de la suprema corte, puede de pronto conservarse la organización actual de las instancias, sin causar trastorno alguno ni producir el menor mal y contarse con elementos de reforma, para que cuando se espida la ley constitucional que organice el poder judicial de la federación, ley cuya urgencia es suma, pueda el congreso determinar sus procedimientos y restablecer sus instancias de manera que se obtengan los dos grandes bienes que las naciones buscan en sus tribunales; **CELERIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS, Y ACIERTO EN LOS FALLOS.**